

Nº 212  
Volumen II  
Año LXX  
Julio-Diciembre 2002  
Fundada en 1933  
ISSN 0303-9986



# REVISTA DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE  
CONCEPCION<sup>MR</sup>

Facultad de  
Ciencias Jurídicas  
y Sociales

## RELACIONES UNION EUROPEA-CHILE: CAMINO A LA ASOCIACION

PAULINA ASTROZA SUAREZ  
Universidad de Concepción

El camino seguido por nuestro país para lograr celebrar el tratado de Asociación Política y Económica con la UE en noviembre de 2003 se inscribe en el marco general de las relaciones entre esta región del mundo y los países latinoamericanos. Distintos factores han determinado la aceleración de esta vinculación desde los años noventa y, en particular nuestro país, ha constituido en esta época un objetivo en la política exterior de los europeos. Las distintas etapas y motivaciones que han llevado a la asociación entre Chile y la UE son objeto de este estudio.

### I. INTRODUCCION

En un mundo que ha venido viviendo grandes transformaciones, principalmente desde fines de los años 80, es evidente que las relaciones entre los estados y entre los pueblos se ven alteradas por los efectos que estos cambios provocan. El fin de la Guerra Fría y del sistema bipolar, con la afirmación de Estados Unidos como superpotencia mundial sin competidor aparente que pueda igualar su poderío militar, económico y político, por lo menos en el corto plazo, provoca un cambio en las estructuras internacionales y del sistema internacional. Aparecen nuevos estados, nuevos desafíos y riesgos, entre ellos el terrorismo a nivel internacional, el narcotráfico, el cuidado del medio ambiente, las migraciones, entre otros, a los que los estados deben hacer frente. Se afianzan nuevas relaciones de poder y, evidentemente, una nueva forma, o más bien, la consolidación de una forma de relación entre los estados que ha llevado, por lo menos en el ámbito

económico, a una mayor vinculación a través de acuerdos de cooperación y de libre comercio. Así, podemos observar una tendencia cada vez mayor hacia la integración económica de estados como es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o ALENA, en sus siglas en inglés o francés), el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros.

Por lo tanto, dentro de la estructura internacional que mantiene su carácter de sociedad internacional de estados yuxtapuestos en que jurídicamente todos son iguales, se ha venido reforzando la búsqueda de soluciones en conjunto a problemas comunes a través de la cooperación internacional que se materializa a través de la celebración de tratados internacionales en diferentes materias, dejando de lado el conflicto o el uso de la fuerza para resolver estos problemas. Sin embargo, debemos hacer notar que no nos encontramos en el tercer estadio señalado por el profesor Reuter<sup>1</sup> en cuanto a la evolución de la sociedad internacional, cual es la creación de instituciones supranacionales, con la excepción notable de la Unión Europea en el primer pilar de su estructura. Afirmamos lo anterior no obstante la situación particular que está viviendo el mundo en la actualidad, en que la voluntad unilateral de la superpotencia abandona la cooperación internacional para solucionar los conflictos internacionales y opta por la vía armada, contrariando el Derecho Internacional y los principios de seguridad colectiva.

De esta manera, las relaciones entre el continente europeo y América Latina se encuadran dentro de esta nueva lógica en las relaciones internacionales y, como es evidente, nuestro país no se ha quedado ajeno a estos cambios.

## II. EVOLUCION DE LAS RELACIONES ENTRE LA UNION EUROPEA Y AMERICA LATINA

Los países miembros de la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, debieron adaptarse a esta nueva estructura internacional. Dentro de esta estrategia de adaptación de Europa, América Latina<sup>2</sup> es uno de los elementos constitutivos de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) de la Unión Europea. Sin embargo, la PESC/América Latina no es uno de los elementos fundamentales de esta política. Ella constituye una parte a la vez

<sup>1</sup> P. Reuter, "Principes de Droit International", R. des C., vol. 113, 1961, pp. 433 ss. Citado por J.P. Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, Editorial Tecnos S.A., sexta edición, Madrid, España, 1996, p. 51.

<sup>2</sup> Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

periférica y necesaria en un mundo cada vez más globalizado y competitivo<sup>3</sup>. En consecuencia, dentro de su política exterior los actuales quince estados han tratado de establecer un marco coherente para sus relaciones con terceros países, entre ellos con los países en vías de desarrollo, como es el caso de América Latina.

La Unión Europea ha heredado, de esta forma, un conjunto complejo de lazos tanto económicos como culturales y políticos, que han marcado las relaciones entre ambas áreas del mundo desde la década de los setenta. En 1971 la Comunidad Europea firma un acuerdo comercial con Argentina; en 1973 hace lo mismo con Brasil y con México en 1975. Estos acuerdos son los llamados de "primera generación", a los que nos referiremos más adelante.

Durante los años ochenta la relación entre europeos y latinoamericanos estuvo marcada por una forma exitosa de interacción, desarrollándose así un aspecto de la PESC a través del diálogo CE-San José y CE-Grupo de Río, incluso antes que la PESC existiera como tal<sup>4</sup>. Indudablemente favoreció esta intensificación de las relaciones entre ambos continentes el ingreso a la CEE de España y Portugal en 1986.

A lo largo de la década de los noventa un cambio significativo se produce en la relación de Europa y América Latina, principalmente desde la Cumbre Ministerial Grupo de Río-Unión Europea de Sao Paulo, en abril de 1994. En esta cumbre se pidió preparar "una estrategia de mediano y largo plazo" para la profundización de la relación y trabajar "hacia una asociación genuina en los campos económico, comercial, industrial, científico y tecnológico"<sup>5</sup>. Un año antes, la Conferencia Ministerial de Copenhague produjo la horizontalización del diálogo político como consecuencia del abandono del paternalismo comunitario de una parte y la elevación del discurso latinoamericano de la otra, mostrando la existencia de intereses que, de todo tipo, existían entre ambas áreas<sup>6</sup>. Este cambio se ve reflejado en una actividad intensa entre ambas regiones que tuvo por objetivo final la institucionalización del diálogo y cooperación eurolatinoamericano en diversos niveles. La Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno europeos y

<sup>3</sup> J.J. Kourliandsky, "Union européenne et Amérique latine: mécanismes d'élaboration d'une politique", en *L'Amérique latine et l'Europe à l'heure de la mondialisation*, Dimensions des relations internationales, bajo la dirección de Daniel Van Eeuwen, Editions Karthala et CREALC, 2002, p. 41.

<sup>4</sup> La PESC comienza como tal a partir del Tratado de Maastricht de 1992.

<sup>5</sup> R. Smith Pereira, "Las relaciones de América Latina y la Unión Europea", en *América Latina y la Unión Europea construyendo el siglo XXI*, P. Leiva editor, CELARE, Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Ediciones, Santiago, 1997, p. 57.

<sup>6</sup> C. Molina del Pozo, "Reflexiones en torno a las relaciones Unión Europea-Chile", en *Chile y el Mercosur en América Latina. VI Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur*, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Editorial Jurídica de Chile, tomo I, 1999, p. 33.

latinoamericanos que se realizó en Río de Janeiro el 28 y 29 de junio de 1999 vino, tardíamente, a aportar una coherencia a una política construida de manera hasta entonces aleatoria.

En cuanto a los fundamentos de la relación entre ambas zonas geográficas, se suele sostener que los lazos que unen a América Latina con esta región del mundo son el resultado de una herencia común que incluye aspectos políticos, culturales y económicos, lo que trae como consecuencia una gran proximidad cultural que favorece el establecimiento de una sólida base para el desarrollo de sus relaciones. Sin embargo, siguiendo al profesor Nizery, se puede afirmar que se ha confundido la relación "euro-latinoamericana" con la relación "ibero-latinoamericana" o, más bien, "Europa latina/América latina". Así, la vinculación con los países latinos europeos, con excepción de España y Portugal, no ha estado exenta de ambigüedades, sobre todo en el caso de Francia. No obstante lo anterior, el objetivo de la política comunitaria es ante todo profundizar la relación por el conocimiento del otro y el reconocimiento de las diferencias mucho más que por la búsqueda de valores comunes, que no tiene sentido si no se apoya sobre la aceptación de la diversidad<sup>7</sup>, principio que informa la propia integración de los europeos.

En este sentido, la Unión Europea ha establecido como ejes prioritarios para ayudar a América Latina el apoyo institucional y la consolidación de los procesos democráticos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el apoyo a las reformas económicas y a la competitividad internacional<sup>8</sup>, articulándose en base a tres temas transversales esenciales, a saber, el apoyo a la cooperación y a la integración regional, la educación y formación, y la gestión de las interdependencias norte-sur. Como consecuencia de la aplicación de estas orientaciones y prioridades, distinguiendo entre regiones y atendiendo las particularidades de cada una de ellas, en las últimas décadas las relaciones políticas se profundizaron, los intercambios comerciales aumentaron, las inversiones europeas crecieron y la cooperación comunitaria con América Latina se mantuvo en una media cercana a los 500 millones de ecus anuales, disminuyendo luego fundamentalmente por la coyuntura de la eventual integración de los llamados países PECOS<sup>9</sup> a la Europa

<sup>7</sup> F-P. Nizery, "Les relations Europe/Amérique latine ou l'histoire d'une formidable ambiguïté", en *L'Amérique latine et l'Europe à l'heure de la mondialisation*, Dimensions des relations internationales, bajo la dirección de Daniel Van Eeuwen, Editions Karthala et CREALC, 2002, p. 37.

<sup>8</sup> Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, "Unión Europea-América Latina. Actualidad y perspectivas del reforzamiento del partenariado" 1996-2000, COM (95) 495, Bruselas, 23 de octubre 1995.

<sup>9</sup> Países de Europa Central y Oriental: Bulgaria, Chipre, Estonia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, República Eslovaca, Rumanía, República Checa, Turquía.



de los 15. Es decir, en la década de los noventa, América Latina se convirtió en el mercado más dinámico del mundo para las exportaciones de la Unión Europea. Entre 1990 y 1995 las exportaciones de la Unión Europea prácticamente se duplicaron<sup>10</sup>.

Desde el punto de vista de las relaciones económicas, especialmente en las áreas del comercio, inversiones y tecnologías, éstas han sido cada vez más estrechas. Al año 2002, la Unión Europea se había transformado en uno de los principales inversionistas en América Latina, siendo, además, el segundo socio comercial extrarregional de América Latina y el primero del Mercosur. Debemos recalcar eso sí que la estructura de los intercambios comerciales entre las dos regiones ha seguido siendo tradicional, es decir, los europeos han seguido importando principalmente materias primas y exportando fundamentalmente productos manufacturados. Además, debe dejarse constancia que América Latina representa una realidad diferenciada en cuanto a su participación internacional. Las tendencias presentes en cada país latinoamericano no son las mismas que las existentes en los demás, lo que evidentemente ha sido considerado en la relación de Europa con esta región del orbe. La realidad de México es distinta a la que se presenta en los países centroamericanos o en los países andinos. Las opciones disponibles para Argentina o Chile tienen muy poco que ver con las que se pueden abrir para la República Dominicana, Cuba o el mismo México<sup>11</sup>.

En cuanto a la cooperación comunitaria, los países miembros de la actual UE han desarrollado una importante actividad en favor de América Latina, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Son numerosas las acciones emprendidas para hacer frente a los problemas sociales más urgentes y a los temas establecidos como prioritarios por la Comunidad Europea. Esta cooperación comunitaria es regida por acuerdos que cubren el conjunto de los países o grupos regionales con la sola excepción de Cuba, quien sólo recientemente ha iniciado un diálogo político más directo con la UE, abriendo ésta una misión diplomática en la isla.

Los acuerdos han sido clasificados en tres tipos. Los primeros acuerdos de la Comunidad con el subcontinente latinoamericano datan de los años 60 y 70, llamados "acuerdos de primera generación". Se trata de acuerdos comerciales no

<sup>10</sup> R. Smith Pereira, "Las relaciones de América Latina y la Unión Europea", en *América Latina y la Unión Europea construyendo el siglo XXI*, P. Leiva editor, CELARE, Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Ediciones, Santiago, 1997, p. 65.

<sup>11</sup> A. VAN KLAVEREN, "América Latina más allá del año 2002". En *América Latina Unión Europea más allá del 2002*, P. Leiva, editor, Ediciones CELARE, Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, Santiago, 1997, p. 12.

preferenciales donde el único objeto era acordar la cláusula de la nación más favorecida a las partes firmantes de los acuerdos. La base jurídica de estos instrumentos fue el artículo 113 del Tratado de la CEE, norma ubicada en el título referente a la Política Comercial Común y que establece en su párrafo 1 que "La política comercial común se basará en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones". Acuerdos de este tipo fueron firmados por la CEE primero con Argentina en 1971, con Brasil en 1973, y en 1975 con México<sup>12</sup>. Si bien es importante políticamente firmar este tipo de acuerdos con la Comunidad por el mensaje que se envía de la voluntad política de los europeos en relación a los latinoamericanos, sus efectos prácticos no son tan evidentes si los países firmantes son ya parte de la OMC, puesto que en virtud de sus normas éstos ya son beneficiarios de esta cláusula.

Fruto del desarrollo de esta relación entre los países latinoamericanos y europeos, se llega a una "segunda generación de acuerdos", los cuales estaban caracterizados por la inclusión de la cooperación económica fundada sobre el interés mutuo. La novedad en este tipo de acuerdos residía en el hecho que constituían acuerdos - marcos en la medida que ellos iban más allá del campo meramente comercial. En este caso, la base jurídica fueron los artículos 113 y 235 del Tratado de la CEE. Esta última norma dispone que "Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo, adoptará las disposiciones pertinentes". Estos acuerdos preveían una extensión del contenido y del alcance de la relación establecida entre las partes, estipulando que la cooperación económica era un elemento necesario para la intensificación de las relaciones. La Comunidad firmó acuerdos de este tipo con Brasil, el Pacto Andino y América Central durante los años 80.

<sup>12</sup> C. Flaesch-Mougín et J. Lebullenger, "Les relations contractuelles de l'Union européenne avec les pays et groupements latino-américains" in *Troisième Conférence ECSA-WORLD, L'Union européenne dans un monde en transformation*, Commission européenne, DG X – Information, Communication, Culture et audiovisuel. Information universitaire, Publications officielles des Communautés européennes, 1998, p. 581.

Finalmente, una nueva etapa se inaugura en las relaciones eurolatinoamericanas con la celebración de los acuerdos de “tercera generación” que fue consolidada durante los años 90, representando un avance significativo principalmente debido a la introducción de una “cláusula democrática” que permite garantizar el respeto de los principios básicos que corresponden al patrimonio de los valores comunes como la democracia y los derechos fundamentales de la persona humana. Esta cláusula es un ejemplo de la instrumentalización política de las materias económicas en la política exterior de la Unión Europea. Dicha norma fue establecida por primera vez en los acuerdos de cooperación celebrados por la Comunidad Europea con Chile y Argentina en los inicios de la década de los 90 y que se transformó en una cláusula de estilo en futuros tratados celebrados por los europeos con otros estados, como los países de Europa del Este y de África. La otra novedad en este tipo de acuerdos la encontramos en la incorporación de la llamada “cláusula evolutiva” que permite a las partes contratantes completar y aumentar el nivel de su cooperación con el transcurso del tiempo. Además, esta misma generación de acuerdos abrió nuevas perspectivas en otras áreas como la cooperación económica, industrial, científica y técnica, del medio ambiente, de la lucha contra la droga, etc. Cabe señalar que todos los países o regiones de América Latina, con la sola excepción de Cuba, han firmado esta clase de acuerdos con la Comunidad.

A lo anterior debemos agregar que, luego del cierre de las negociaciones entre Chile y la UE en mayo de 2002, las Partes calificaron el Acuerdo de Asociación entre ambas regiones como un acuerdo de “cuarta generación plus”, con el fin de resaltar que el instrumento al que llegaron finalmente es el acuerdo más amplio y completo que un país tercero ha celebrado con la UE, más integral aun que los acuerdos de asociación que tienen los países mediterráneos o PECOS con la UE o el que tiene México con este mismo bloque.

Otro tema importante a destacar en esta breve reseña de las relaciones euro latinoamericanas que nos permitirá comprender mejor la situación de Chile, es el del llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), instrumento que se inscribe dentro de la cooperación al desarrollo de la UE.

En los años sesenta, los países en vías de desarrollo piden obtener un tratamiento preferencial para todos sus productos de exportación. La tesis era que un mejor acceso al mercado de los países industrializados les permitiría aumentar sus ingresos por exportación y, en consecuencia, podrían importar los bienes de equipamiento necesarios para su desarrollo<sup>13</sup>. Así, el SPG apunta al

<sup>13</sup> C. Franck, *Politique Extérieure de l'Union Européenne*, Diffusion Universitaire Ciaco, Université Catholique de Louvain, Bélgica, 1999, p. 92.



conjunto de preferencias acordadas por todos los países industrializados con los países en vías de desarrollo para todos los productos manufacturados. Sin embargo, este principio general está sometido a numerosas excepciones, tanto en lo que concierne a los beneficiarios como a los productos específicos. La idea fundamental de este sistema es tender a favorecer el acceso al mercado europeo de las exportaciones de América Latina y, particularmente, de aquellas provenientes de los países menos desarrollados.

Desde 1971 a 1980 los productos admitidos según el SPG son sometidos a diferente tratamiento según la "sensibilidad" decreciente para la producción europea. De 1981 a 1990, el SPG comunitario fue readecuado. La innovación principal fue la individualización por país beneficiario del SPG que conducía a una modulación de las concesiones preferenciales en función del nivel de competitividad del beneficiario. En diciembre de 1994 se estableció un tercer tipo de SPG. Sus características son la supresión de los cupos y techos máximos, modulación de los derechos de aduanas y la graduación del tratamiento preferencial<sup>14</sup>. En consecuencia, en sus relaciones con América Latina, la Comunidad Europea decidió acordar condiciones preferenciales a ciertos productos industriales y agrícolas a través de este sistema. En 1994 se agregan regímenes especiales que favorecen a los países andinos y a América Central para los productos agrícolas, con la finalidad de alentarlos en su acción de lucha contra la droga. En diciembre de 1998, este sistema de preferencias generalizadas "droga" fue extendido a productos industriales centroamericanos. Por tratarse de un instrumento unilateral comunitario que se renueva cada tres años no tiene carácter permanente, dependiendo por lo tanto de la voluntad de los europeos, y su prolongación es el objeto de decisiones periódicas de las instancias de la Unión Europea. Y es aquí donde cobra importancia la celebración de acuerdos internacionales que tiendan a reconocer estos beneficios o a aumentarlos, puesto que pasan a ser beneficios con carácter vinculante, efecto propio de los tratados internacionales.

El fundamento jurídico del SPG lo encontramos en el artículo 235 (nuevo artículo 308) del Tratado de Maastricht. Sin embargo, una sentencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas del 26 de marzo de 1987 estableció que el sistema de preferencias generalizadas es expresión de una nueva concepción de las relaciones comerciales internacionales y, por lo tanto, su fundamento es el

<sup>14</sup> Este resumen fue tomado de una nota "Vademecum" sobre el nuevo SPG redactado por M.F. Nizery, CCE, DGI.

artículo 113 (nuevo artículo 133). La importancia de este fallo radica en el hecho que desde 1987 los reglamentos sobre el SPG se toman no por unanimidad sino que por mayoría calificada.

Las relaciones a nivel político entre estas zonas del mundo encuentran una primera manifestación clara en el estatuto de observador permanente que tiene la Comunidad Europea, la que tiene la personalidad jurídica en la estructura de la Unión Europea, en la Organización de Estados Americanos (OEA), del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Por su parte, el diálogo político interparlamentario comenzó en 1974 y se desarrolla bajo la forma de conferencias bianuales entre el Parlamento europeo y el Parlamento latinoamericano. Este diálogo se ha mantenido sin interrupción a pesar de la existencia de problemas tan graves como la irrupción de regímenes autoritarios y del período de inestabilidad económica de los años 70 y 80, período denominado de la "década perdida". Otro tipo de relaciones existen también entre el Parlamento europeo y el Parlamento andino, la comisión parlamentaria del MERCOSUR y el Parlamento centroamericano desde 1991.

### III. EVOLUCION DE LAS RELACIONES CHILENO-EUROPEAS

Las relaciones entre nuestro país y el bloque comunitario han sufrido una evolución caracterizada por un acercamiento gradual pero sólido. Un importante contacto se produjo entre ambas partes desde la institucionalización de las relaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, del cual Chile forma parte, y de la Unión Europea, a principios de los años noventa, fortaleciéndose esta relación con el correr de los años.

El inicio de las relaciones entre Chile y la Unión Europea se remonta a 1962, fecha en que la entonces Comunidad Económica Europea instala en Santiago la primera oficina de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para América Latina, oficina que servía de enlace con el Instituto Latinoamericano del Hierro y del Acero (ILAFA). En 1967 dicha oficina fue transformada en la primera Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas para América Latina, sirviendo de sede para toda la región hasta 1978, año en el que fue transferida a Caracas en señal de rechazo al régimen militar, dejando en Santiago una pequeña oficina que pasó a depender de la nueva delegación instalada en Venezuela. Luego de la restauración del régimen democrático, se reinstaló una delegación diplomática pero esta vez a nivel bilateral.

Desde comienzo de los años noventa, las relaciones entre Chile y los países

europesos mejoraron considerablemente. Ciertos factores favorecieron este nuevo acercamiento entre las partes. En primer lugar, los estrechos vínculos que Chile siempre había destacado y que lo unen con los países de la Unión Europea, vínculos que son producto de las afinidades culturales, políticas y económicas, sustentados en una base cultural común. Lo anterior permitió que entre ambos existiera una concepción similar de valores considerados esenciales en sus respectivos sistemas políticos como el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia como forma de gobierno, entre otros, y que han sido evocados en cada uno de los tratados firmados por ambas partes, no siendo la excepción el Acuerdo de Asociación firmado en el año 2002. Así, Chile había reconocido una visión común del hombre, de la sociedad y del mundo<sup>15</sup> que lo unía más aún a Europa.

En segundo lugar, otro factor importante que determina esta morigeración en las relaciones entre Chile y la CE a partir de los años noventa lo constituye la vuelta a la democracia en Chile. Durante los años del régimen militar chileno la Comunidad Europea y todos sus estados miembros se distanciaron del Gobierno del general Pinochet, sin embargo se mantuvieron las relaciones pese a las turbulencias políticas vividas en Chile y la Comunidad Europea estuvo presente al lado de la sociedad chilena a través de organizaciones humanitarias. Por su parte, el Parlamento Europeo se situó a la cabeza de los esfuerzos de la Europa comunitaria a favor de la vuelta a la democracia en Chile, incluyendo desde 1988 en el presupuesto comunitario una línea específica a favor de las organizaciones no gubernamentales activas en nuestro país y creando una nueva partida presupuestaria destinada a "apoyar el proceso de democratización en Chile y América Latina", que se volvió a consignar e incrementar en 1993<sup>16</sup>. Por lo tanto, el éxito de la transición a la democracia y la consolidación del régimen político en Chile en un clima de estabilidad, con ausencia de graves conflictos políticos y con un consenso entre las distintas fuerzas políticas en cuanto a las grandes líneas directrices del país, hicieron cada vez más atractivo nuestro país a los ojos de los europeos.

En tercer lugar, en el terreno económico nuestro país había adoptado una política de apertura al exterior en todos los ámbitos, impulsada desde los años

<sup>15</sup> M. Fernández, "Hacia una asociación entre Chile y la Unión Europea", en *América Latina y el Caribe - Unión Europea: Una asociación estratégica para el siglo XXI*, P. Leiva editor, CELARE, diciembre 1999, p. 182.

<sup>16</sup> "Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile", Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM (95), 31 de mayo de 1995.

ochenta, llamada de "Regionalismo Abierto". Esta es definida por la Comisión Europea como la negociación de acuerdos regionales para favorecer la expansión del comercio y las inversiones con vistas a una liberalización general del comercio mundial<sup>17</sup>. Esta estrategia se aplica, en el caso chileno, sobre la base de principios definidos y políticas de gran estabilidad, tales como la libertad económica, no discriminación, libertad para importar y exportar, libertad para comprar y vender divisas, libertad y estabilidad para la inversión extranjera, protección de la propiedad intelectual, preservación del medio ambiente y de la vida silvestre y seguridad en los compromisos internacionales<sup>18</sup>. Por otra parte, Chile aparecía para los europeos como el prototipo de pequeña economía abierta, con exportaciones que absorbían cerca de un tercio de la actividad productiva y con escasa protección aduanera<sup>19</sup>. Además, Chile había demostrado la capacidad de iniciativa del sector privado, sus tasas de ahorro y de inversión al año 1996 aparecían como las más altas de América Latina, su ahorro público en 1994 era excedentario en relación a la inversión pública, lo que permitía a la administración chilena obtener un excedente presupuestario que reducía la deuda pública; su deuda exterior neta de reservas y el servicio financiero de la deuda habían disminuido desde los años noventa. El conjunto de estos elementos de política económica, más otros de igual importancia, contribuyeron a mantener en Chile una tasa de crecimiento relativamente alta (6,3% anual a precios constantes en 1990-1994) y un índice de desempleo comparativamente bajo en el contexto mundial de la época<sup>20</sup>.

Los factores antes señalados sirvieron para que Europa se acercara nuevamente a nuestro país, acercamiento que se vivió en varias etapas continuas y que han implicado, en definitiva, la celebración de varios tratados internacionales entre las partes. Así, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en poner en vigencia un acuerdo marco de cooperación de los llamados acuerdos avanzados de "tercera generación" en el año 1991. Este acuerdo, firmado el 20 de diciembre de 1990, basa las relaciones entre Chile y la Comunidad Europea en el respeto a los principios democráticos y de los derechos humanos. Además, se

<sup>17</sup> "Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile", Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM (95), 31 de mayo de 1995.

<sup>18</sup> P. Leiva, "Las relaciones de Chile y la Unión Europea", en *América Latina y la Unión Europea construyendo el siglo XXI*, Ediciones CELARE (Centro Latinoamericano para las relaciones con Europa), 1996, p. 45.

<sup>19</sup> El arancel exterior había pasado de un 30% en 1984 a un 11% en 1990.

<sup>20</sup> Datos obtenidos de la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento europeo de 1995, "Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile".



incluyen innovaciones en disposiciones que establecen una cooperación amplia en materia científico-tecnológica, de formación profesional y de medio ambiente. Otras cláusulas abren la posibilidad de una cooperación en el ámbito comercial, social, cultural, de la administración pública, así como de la información y de la comunicación.

En relación a los efectos concretos que significó este acuerdo de 1990 durante el período que rigió, podemos constatar que él se utilizó de una manera muy importante por ambas partes, haciendo posible que la Unión Europea estuviera presente en vastos sectores y que contribuyera de una manera significativa al proceso de desarrollo de Chile a través de diversas vías de cooperación. Además, un diálogo institucionalizado se puso en marcha gracias a la aplicación de este acuerdo, lo que permitió que a través de esta instancia se abocaran al conocimiento de diversos problemas de tipo social, político y económico.

Otro de los logros de este acuerdo es que permitió incrementar de manera muy importante las actividades de cooperación. Se estima que éstas alcanzaron en 1991 un monto total de 18 millones de ECU, monto superior al registrado el año inmediatamente anterior que sólo llegó a un total de 13,2 millones de ECU<sup>21</sup>. Cabe destacar la creación de un centro de cooperación y de transferencia de tecnología denominado "Fundación Eurochile" con sede en Santiago, fundación de tipo privado, sin fines de lucro. Su objetivo fundamental consiste en crear, promover y consolidar los vínculos económicos, comerciales y tecnológicos entre empresarios de las naciones que integran la Unión Europea y los empresarios e instituciones chilenas tanto privadas como públicas<sup>22</sup>.

Por su parte, el año 1992 significó para Chile el acceso a unos 2,5 millones de ECU. Así, Chile se benefició por primera vez de un programa integrado de asistencia financiera y técnica en las diversas regiones del país por un monto de 10 millones de ECU, debido principalmente a la ampliación tanto sectorial como geográfica del ámbito de aplicación de esta cooperación<sup>23</sup>.

A partir de 1993, la cooperación tuvo como principal objetivo el financiamiento de proyectos que tendieran a la diversificación de las exportaciones de productos agrícolas, al fomento de las inversiones, a la cooperación industrial y energética y a la transferencia de tecnologías. Estos montos alcanzaron un total anual cercano a los 24 millones de ECUS. Durante el año siguiente se mantuvo

<sup>21</sup> M. Fernández, *Relaciones con la Unión Europea: una visión latinoamericana*, Ediciones CELARE (Centro Latinoamericano para las relaciones con Europa), 1995, p. 45.

<sup>22</sup> [www.eurochile.cl](http://www.eurochile.cl)

<sup>23</sup> M. Fernández, *Relaciones...* (ob. cit.), p. 46.



esta tendencia de cooperación orientada hacia los sectores económicos y tecnológicos, pero se definieron, además, tres grandes temas estratégicos: la lucha contra la pobreza, la continuación del proceso de reforma del Estado y la internacionalización del sistema de producción.

Finalmente, este Acuerdo de Cooperación del año 1990 permitió encaminar las negociaciones entre las partes para llegar a la celebración de un nuevo tratado. La idea fue que un nuevo instrumento jurídico internacional vinculara a las partes de una manera más amplia, es decir, que abarcara al conjunto de las relaciones bilaterales y no sólo se limitara al ámbito tradicional de la cooperación, que se había visto muy favorecido en el último tiempo, pero que Chile estimaba insuficiente.

A partir del año 1994, un año después del nacimiento de lo que hoy es la Unión Europea, comienza una nueva etapa para Chile en sus relaciones con ésta. El interés fundamental de esta etapa tiende a la profundización de los lazos bilaterales establecidos entre ambos, de manera institucional, con la intención de ir más allá de lo que se había logrado avanzar desde 1990 hasta ese momento.

Lo que favoreció de manera importante este nuevo acercamiento entre nuestro país y los doce estados que formaban la Unión Europea en ese momento<sup>24</sup>, fue la atención especial que la UE prestaba a América Latina y, de manera más importante, la consolidación del proceso democrático en Chile, que iba acompañada de la intensificación de la inserción de la economía chilena en el sistema internacional.

Sin embargo, pese a estos elementos positivos de nuestro país para negociar con los europeos, el Consejo Europeo de Corfú invitó a la Comisión Europea a presentar al Consejo de Ministros propuestas para intensificar las relaciones entre la Unión Europea con México y el MERCOSUR, sin mencionar a Chile. Las conclusiones de este Consejo Europeo, celebrado los días 24 y 25 de junio de 1994, señalaban: "El Consejo Europeo reafirma la importancia que le atribuye a sus relaciones con los países latinoamericanos y sus agrupaciones regionales. Manifiesta su satisfacción por los progresos conseguidos en los ámbitos de la democracia y del respeto de los derechos humanos, la paz y el desarme, las reformas económicas y la integración regional. En este contexto, el Consejo Europeo se congratula de la adhesión de México a la OCDE y manifiesta su deseo de fortalecer sus relaciones políticas y económicas con dicho país. Asimismo confirma la intención de la Unión Europea de fortalecer sus relaciones con el Mercosur e

<sup>24</sup> Recordemos que Austria, Suecia y Finlandia ingresan en 1995.

invita al Consejo y a la Comisión a que continúen ocupándose más detalladamente de estas cuestiones”<sup>25</sup>.

Como reacción a esta exclusión, nuestro país hizo una presentación solicitando su inclusión. De esta propuesta tomó nota el Consejo en noviembre de 1994, atendiendo principalmente el especial interés de nuestro país en intensificar sus vínculos bilaterales con la Comunidad. Ese mismo año se presentó al ministro de Relaciones Exteriores chileno la respuesta comunitaria en la que se manifiesta la intención de la UE de poner en marcha un diálogo con Chile con miras a una evolución más profunda a largo plazo.

Es el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 el que invita al Consejo de Ministros y a la Comisión Europea a “concretizar las deliberaciones relativas a una futura forma contractual de las relaciones con México y a la ampliación de las relaciones con Chile”, todo dentro de la idea de la UE de instaurar entre ella y los países de América Latina una nueva y amplia colaboración. Un ejemplo de esta nueva política de los europeos lo encontramos en la celebración de numerosos convenios y tratados entre Chile y los países miembros, entre los cuales destacan aquellos que estaban destinados a promover las relaciones bilaterales en campos muy diversos.

En esta época el éxito de la transición a la democracia y la consolidación del régimen político permitieron a Chile presentarse como un excelente socio para la UE. La estabilidad que comenzaba nuevamente a caracterizar a nuestro país fue un factor decisivo al momento de adoptar la decisión de profundizar los lazos con Chile así como sus buenos resultados económicos. Además, la crisis financiera y monetaria que había azotado a la mayoría de las economías europeas durante el primer trimestre de 1995 no había producido los mismos efectos en Chile, sorteando de buena forma los inconvenientes del llamado “efecto tequila”. Esto no nos debe hacer creer que los europeos ignoraran los graves problemas de subdesarrollo a que nos veíamos y seguimos enfrentados, como lo es la pobreza, entre otros, pero nos presentábamos como un modelo latinoamericano de desarrollo.

También los europeos tomaron en cuenta la relación de Chile con el Mercosur en esos años. Ya en esa época se vislumbraba que la adhesión plena de Chile a este bloque era poco probable debido a que el arancel exterior común de los países sudamericanos era en principio discontinuo (variaba entre el 0% y el 30%) y como media se presentaba como más elevado que el que Chile tenía en

<sup>25</sup> “La profundización de las relaciones entre la Unión Europea y México”, Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo, 8 de febrero de 1995.

esa época (11%). Por lo tanto, para todos los sectores económicos una modificación al alza de los aranceles chilenos tendientes a aumentarlos para equipararse al del Mercosur aparecía como inconcebible. Por lo tanto, Chile propuso una fórmula de asociación que le permitiera como máximo una situación de libre comercio con el Mercosur, pero manteniendo la diferencia del arancel exterior, evitando de esta forma tener un arancel común más alto que el que regía en Chile en ese momento. El acuerdo con el Mercosur fue finalmente firmado el 25 de junio de 1996, entrando en vigencia el 1 de octubre de 1996.

En cuanto a las relaciones de Chile con los países de América del Norte, los europeos constataron que Chile había optado por el camino de la negociación de una adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN), y no seguir la vía de las negociaciones individuales con Estados Unidos. El futuro de esta adhesión dependía de la posición de Estados Unidos, la que se vio afectada por la crisis mexicana y por razones de política interna estadounidense. En todo caso, Chile había ya suscrito un tratado de libre comercio con México, el que se encontraba vigente y luego lo haría con Canadá.

En consecuencia, nuestro país estaba vinculado, a través de acuerdos de complementación económica y de libre comercio, con todos los países miembros de la ALADI, con la sola excepción, hasta ese momento, de Perú. Además, conforme a esta misma estrategia de regionalismo abierto, Chile se había incorporado, en noviembre de 1994, al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC.

Todo lo anteriormente expuesto se vio apoyado por un incremento de las inversiones directas productivas extranjeras. Así por ejemplo, la participación europea en el sector manufacturero y en los servicios, el porcentaje de capitales europeos del total de inversiones extranjeras alcanzaba al 44%, lo que hacía que las empresas europeas tuvieran una importante participación en los sectores chilenos con mayor futuro en la economía chilena<sup>26</sup>. Los socios más activos de Chile en cuanto a la inversión materializada eran el Reino Unido, España, Finlandia y Países Bajos. En cuanto a las exportaciones, éstas constituían el principal motor del desarrollo económico chileno, y los recursos naturales representaban más del 90% de estas exportaciones.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Banco Central de Chile que consideraban las exportaciones mundiales chilenas hasta mayo de 1995, los países

<sup>26</sup> "Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile", Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo, Bruselas, 31 de mayo de 1995.

miembros de la Unión Europea concentraban un 26,7% del total de sus exportaciones, ubicándose como el segundo megamercado más importante para Chile, luego de la región Asia Pacífico (32,4%). Esto representaba una diferencia significativa en comparación a los otros bloques relevantes para Chile: el Mercosur con un 11,6% y el NAFTA con un 16,7%.

A su vez, durante 1995, la Unión Europea se había convertido en el segundo proveedor de Chile con un 20,9 %, tras el NAFTA que alcanzaba un 31%, significando con ello que, considerando el conjunto del comercio exterior de Chile, la Unión Europea continuaba siendo el socio principal por sobre los otros megamercados<sup>27</sup>.

No puede pasarse por alto, sin embargo, que la estructura exportadora de Chile hacia la Unión Europea reflejaba distorsionadamente el potencial efectivo de los intercambios, pues principalmente en el sector agrícola agroindustrial e industrial los aranceles externos de la Unión Europea son escalonados y, en los hechos, constituían un obstáculo a un potencial comercio de productos con mayor valor agregado. Esta era precisamente una situación que Chile deseaba modificar al estructurar sus futuras relaciones con la Comunidad Europea.

En consecuencia, durante 1994 y 1995, tanto la Unión Europea como Chile pusieron de manifiesto su firme decisión de reforzar y profundizar sus relaciones. Por parte de los chilenos, éstos deseaban superar el acuerdo que regía las relaciones entre ambos desde 1990, mediante la celebración de un nuevo acuerdo bilateral que no sólo fortaleciera la cooperación, sino que, además, se extendiera el ámbito de la relación a otras áreas tales como la liberalización recíproca del comercio y las inversiones, sin dejar de lado el área de los servicios. Para ello, Chile sostenía que el marco institucional de las relaciones debía contemplar, en primer lugar, una liberalización completa y progresiva de todo el comercio, y, en segundo lugar, la existencia de normas que promovieran los intercambios en servicios y las inversiones recíprocas. Además, consideraba conveniente que un futuro acuerdo con la Unión Europea contemplara otras áreas que garantizaran una relación más profunda, como la tecnología, la educación, la ciencia y la cultura.

En conclusión, Chile sostenía que la nueva creación bilateral con la Unión Europea debía basarse en un nuevo acuerdo, en el sentido que debía superar el Acuerdo Marco de Cooperación, constituyendo el primer paso hacia una asociación entre las partes: integral, es decir, que abarcara diferentes campos como el ámbito

<sup>27</sup> "Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile", Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo, Bruselas, 31 de mayo de 1995.



político, económico, social, cultural, científico, tecnológico, etc.; bilateral, siendo capaz de comprometer y ligar a ambas partes; y que se materializara en el más breve plazo<sup>28</sup>.

Frente a la petición de Chile de iniciar nuevas negociaciones con la Comunidad para llegar a la celebración de un nuevo acuerdo que rigiera las relaciones entre ambas partes, por un lado y la situación del Mercosur, dentro del marco de las relaciones interregionales del otro, a la Unión Europea se le presentaban diversas fórmulas o vías de acción, dentro de las cuales debía elegir aquella que le pareciera la más adecuada dada las características particulares de cada caso y las condiciones del momento.

La primera estrategia que se le presentaba a los países miembros de la UE era la interregional, es decir, el que la negociación se diera entre la UE, el Mercosur y Chile. A este respecto, la Comisión Europea señaló en un comunicado que, considerando que la relación entre Chile y el Mercosur sería en breve plazo una relación de asociados, con un importante acuerdo de liberalización y, a mediano plazo, de adhesión total, debía considerarse la negociación europea con el Mercosur como un elemento determinante para la relación bilateral de la Unión Europea con Chile. En este contexto, la Comisión estimó que cabía pensar que la aproximación entre la Unión Europea y el Mercosur facilitaría a su vez el proceso de integración regional entre Chile y el Mercosur, debido a la gran importancia que tienen para Chile las relaciones con Europa. Además, estimaban que los intereses específicos chilenos no complicarían la negociación Unión Europea/Mercosur, ya que las exportaciones chilenas a Europa afectaban a sectores menos sensibles que los del Mercosur, y las importaciones chilenas procedentes de Europa se encontraban con barreras menos elevadas que en el Mercosur.

La segunda opción era la bilateral, es decir, que las negociaciones se llevaran entre la UE-Chile solamente, de manera paralela a las negociaciones UE-Mercosur.

Habiendo ambas partes manifestado su interés de revisar el acuerdo del año 1990, siendo la ocasión favorable para reconsiderar su contenido y existiendo una cláusula evolutiva en él que permitía ampliar considerablemente los campos de la cooperación, la Comisión consideró que podría, tomando en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes, proyectarse un proceso de negociaciones separadamente con Chile.

Finalmente, pese a que la Comisión prefería un nuevo mecanismo de relación con Chile que se desarrollara a través de una fórmula que privilegiara y

<sup>28</sup> P. Leiva, Las relaciones (ob. cit.), p. 129.



reforzara los procesos de integración regionales, es decir, a través del Mercosur, el camino de preparación del nuevo Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se realizó sobre bases puramente bilaterales, debido principalmente al hecho de que Chile en esa época sólo podía aspirar a una condición de "asociado" del Mercosur, firmando un acuerdo de libre comercio, sin entrar a formar parte de la Unión Aduanera. Con el paso del tiempo, esta opción adoptada aparece como la más conveniente a nuestro país puesto que las negociaciones entre la UE y el Mercosur han sido más dificultosas de lo esperado y, en efecto, se encuentran estancadas hace mucho tiempo, incluso antes de la crisis en Argentina y Brasil.

En este análisis, no podemos dejar de considerar ciertos factores geoeconómicos y geopolíticos que empiezan a jugar un rol importante. Los europeos advirtieron en aquella época que una eventual adhesión de Chile al NAFTA podría traer como consecuencia inmediata una desviación del comercio que afectaría las exportaciones de bienes de equipo y de bienes de consumo duraderos europeos, aun cuando la barrera arancelaria europea del 11 % no fuera demasiado elevada. Por otra parte, se consideró que la intensificación de las relaciones chilenas con los demás países de América Latina, y en particular la asociación al Mercosur, podría alentar una concentración de las exportaciones no tradicionales chilenas en esta zona y reduciría así la importancia del mercado europeo para la diversificación productiva chilena. En consecuencia, la amenaza del establecimiento de una "fortaleza americana" comenzaba a aparecer en algunos círculos europeos. En Europa, los pasos hacia un acercamiento en el hemisferio occidental eran vistos con aprehensión. Los políticos y empresarios europeos veían con preocupación que posibles acuerdos económicos en América Latina pudieran dar lugar a un bloque cerrado, limitando así las oportunidades de negocios para los europeos.

Finalmente, el texto aprobado correspondía a las características generales planteadas por Chile, es decir, un acuerdo nuevo, bilateral, integral (ámbitos político, comercial, económico y de cooperación) y con posibilidades de ser negociado en el más breve plazo.

El acuerdo establece como objetivos el fortalecimiento de las relaciones existentes entre las partes, especialmente mediante la preparación de la liberalización progresiva y recíproca de todos los intercambios, con el fin de sentar las bases de un proceso destinado a establecer, en el futuro, una asociación de carácter político entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y Chile, de conformidad con la OMC y teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados

productos<sup>29</sup>. A fin de intensificar las relaciones, el acuerdo contempla como medios el diálogo político, comercial, económico y la cooperación, considerando la posibilidad de ampliarlos a otros temas de interés común.

En resumen, el Acuerdo de Florencia informa de la plena y completa adhesión de las partes al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales. Cabe preguntarse entonces, qué pasaría en el supuesto que alguna de las partes no continuara reconociendo estos principios. Tal vez, siguiendo a Carlos Molina del Pozo<sup>30</sup>, pudiera valorarse la citada situación como incumplimiento sustancial del acuerdo marco en el que cabe adoptar las medidas apropiadas establecidas en el art. 43 del tratado.

Se reconoce también en este acuerdo la vinculación de las partes a los valores y principios de la declaración final de la Conferencia Mundial para el Desarrollo Social celebrada en marzo de 1995 en Copenhague; se plasma una profundización de la intención de mantener y reforzar las reglas de un comercio internacional libre según las directrices de la OMC; se estima que el acuerdo se basa en la cooperación política profunda, la liberalización progresiva y recíproca de todos los intercambios así como en el reconocimiento de la sensibilidad de determinados productos (especialmente agrícolas). Se reconoce, además, el principio de reciprocidad y de comunidad de intereses, dejando atrás las antiguas prácticas basadas en el paternalismo europeo hacia los países latinoamericanos.

El 16 de diciembre de 1995 se firma la Declaración Conjunta sobre Diálogo Político entre la UE y Chile. En esta declaración, las partes reafirman su intención de establecer un nuevo acuerdo, cuyo objetivo final fuera el establecimiento de una asociación de carácter político y económico que contemplaría, entre otras materias, una liberalización gradual y recíproca de los intercambios. Las partes convienen iniciar un diálogo político fortalecido, destinado a asegurar una concertación más estrecha sobre materias de interés común, particularmente por medio de una coordinación de sus respectivas posiciones en las instancias multilaterales competentes. Se reconoce, además, la posibilidad de desarrollar este diálogo junto a otros socios de la región o, en la medida de lo posible, en forma separada de los otros diálogos políticos ya establecidos. En relación a los mecanismos de diálogo, las partes convinieron sostener encuentros regulares, cuyas modalidades serían definidas por ellas, entre el Presidente de la República

<sup>29</sup> L. Narbone, "Análisis de los acuerdos de cooperación Unión Europea - Chile y la Unión Europea-Mercosur", en Chile y el Mercosur en América Latina. VI Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Editorial Jurídica de Chile, tomo I, 1999, p. 61.

<sup>30</sup> C. Molina, Reflexiones... (ob. cit.), p. 44.

de Chile y las más altas autoridades de la Unión Europea, entre los ministros de Relaciones Exteriores, entre otros Ministros sobre asuntos de interés común y entre los altos funcionarios de ambas partes<sup>31</sup>.

La adopción de la Resolución del Parlamento europeo para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile del 19 de enero de 1996, fue el paso previo a la firma del nuevo tratado entre las partes. Esta resolución significó un importante respaldo al proceso en curso. En especial, cabe destacar su "apoyo a la estrategia cuyo objetivo final sería alcanzar una asociación política y económica entre la Unión Europea y Chile, mediante la negociación de un nuevo acuerdo"<sup>32</sup>.

Finalmente, el nuevo acuerdo, firmado el 22 de junio de 1996, en Florencia, Italia, aunque no llegó a ser de libre comercio, significó un incremento sustancial de la colaboración europea. Para Chile este tratado se transformó en un convenio con gran significado y potencial político, económico y financiero.

#### IV. HACIA LA ASOCIACION

El Acuerdo de Florencia entró definitivamente en vigor el 1 de febrero de 1999, una vez finalizados los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigencia. Antes de su entrada en vigor, y ya desde los primeros días del año 1997, las partes iniciaron nuevamente las conversaciones con el objetivo final de llegar a la asociación política y económica entre ambas regiones. Sin embargo, en ese momento existían grandes reticencias en el seno de la UE a incluir el sector agrícola en el acuerdo de libre comercio, puesto que las economías sudamericanas en general gozan de un sector agrícola muy competitivo, especialmente en productos cárnicos, cereales, frutas, pescados, azúcar y café, cuyos precios son sensiblemente inferiores a los europeos y con la ventaja de la producción en contraestación respecto a este continente.

Países como España, Italia y Portugal deseaban iniciar las negociaciones de la zona de libre comercio entre ambas áreas. En cambio, un eje franco-británico se mostró reticente a la idea –por motivos diferentes– prefería posponer las negociaciones hasta el año 2002. Los primeros, por miedo a la avalancha de productos agrícolas sudamericanos (teniendo en cuenta la importancia del voto

<sup>31</sup> "Declaración Conjunta sobre el Diálogo Político entre la Unión Europea y Chile", Madrid, 16 de diciembre de 1995.

<sup>32</sup> Resolución del Parlamento europeo adoptada el 19 de enero de 1996.

agrícola para el entonces y actual Presidente francés), los segundos por priorizar la posición comunitaria en la Ronda del Milenio en el marco de la OMC.

La primera postura resultó ganadora en la Cumbre de Río de Janeiro de jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros de América Latina y de la UE celebrada a fines de junio de 1999, puesto que los estados miembros de la UE, los países integrantes del Mercosur y Chile firmaron una declaración conjunta según la cual las negociaciones para la creación de la zona de libre comercio entre ambas áreas comenzarían en noviembre de 1999 por lo que a barreras no arancelarias se refería, mientras que las negociaciones sobre agricultura, servicios y barreras arancelarias debían esperar a julio del 2001<sup>33</sup>.

En relación a Chile, el 22 de julio de 1998, la Comisión Europea aprobó el Proyecto de Directivas para la negociación entre este país y la Unión Europea.

En términos generales, el Acuerdo de Asociación incluye tres elementos esenciales: la asociación en asuntos políticos y de seguridad, es decir, el diálogo político; el reforzamiento de la cooperación económica y social; y la creación de un área de libre comercio en bienes y servicios de acuerdo a las normas de la OMC, considerando la sensibilidad de determinados productos.

La estructura, metodología y calendario de negociaciones fueron adoptados por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y Chile, durante la reunión cumbre efectuada en Río de Janeiro en junio de 1999. En cuanto a lo primero, se estableció un Comité de Negociaciones que tenía como función encargarse de la supervisión general y de la coordinación de las negociaciones en los aspectos comerciales y de cooperación, el cual sería directamente responsable de las negociaciones comerciales; en segundo lugar, se creó un Subcomité de Cooperación, que condujo las negociaciones en este campo, dependiente directamente del Comité de Negociaciones; el Comité de Negociaciones, además, podía establecer grupos técnicos para llevar a cabo las actividades relacionadas con las negociaciones comerciales y, por último, se establecen las respectivas secretarías de coordinación, ejercidas por representantes de la Comisión Europea y el Gobierno de Chile que tuvieron como función la organización y preparación general de las reuniones, la distribución de los documentos oficiales y la mantención de la buena comunicación entre las partes.

La primera reunión efectuada en el marco de las negociaciones entre Chile y la UE fue celebrada en Santiago de Chile entre los días 10 y 11 de abril de

<sup>33</sup> El euro y su impacto en las relaciones económicas y comerciales, ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Misión de Chile ante la Unión Europea, p. 18, Bruselas, Bélgica.



2000. De esta manera, se dio inicio a una de las más importantes negociaciones realizadas por Chile. En cuanto al diálogo político, las partes acordaron la creación de un grupo de trabajo que tuviera la tarea de identificar las áreas de cooperación política, de definir las modalidades de la misma y que acordara los mecanismos operativos para su realización. Anualmente, este grupo sometió su informe al Comité de Negociaciones. Sobre el tema de cooperación, se acordó la estructura de este ámbito. El grupo de cooperación estuvo presidido por el director de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) e integrado además por los representantes de cada una de las instituciones coordinadoras de los tres subgrupos de trabajo (cooperación económica, cooperación cultural y educacional, cooperación científica y tecnológica). Integraron también este subcomité instituciones privadas que tenían relación directa con la UE.

Luego de casi dos años de negociaciones y de diez rondas celebradas en Santiago y Bruselas, el viernes 26 de abril del 2002 Chile y la Unión Europea llegaron a un acuerdo final. El anuncio del cierre de negociaciones lo hicieron a través de una Declaración Política en la II Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y El Caribe, efectuada en Madrid los días 17 y 18 de mayo del 2002. El trámite de la firma se llevó a cabo en la ciudad de Bruselas el 18 de noviembre de 2002 por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad Alvear, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y presidente de la Comisión, Per Stig Moller; los Comisarios Pascal Lamy y Chris Patten, y los ministros de los quince estados miembros de la UE<sup>34</sup>. El 17 de diciembre de 2002 la Cámara de Diputados de Chile aprobó el texto del tratado por 107 votos a favor, 1 abstención y 3 en contra. Por su parte, el Senado aprobó también por amplia mayoría el acuerdo el 14 de enero de 2003, entrando en vigencia en las materias de competencia de la Comunidad Europea, sin necesidad de la aprobación por parte del Parlamento europeo ni de los parlamentos nacionales, el 1 de febrero de 2003. En lo que dice relación con las materias de competencia compartida entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, es necesaria la aprobación de éstos. Así, el Parlamento europeo aceptó el tratado el 12 de febrero de 2003, faltando sólo la aprobación de los parlamentos de los quince estados miembros y su posterior ratificación por los órganos internos que según su legislación interna corresponda.

<sup>34</sup> [http://www.direcon.cl/frame/acuerdos\\_internacionales/f\\_bilaterales.html](http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacionales/f_bilaterales.html)